

Bloqueo universitario

La huelga cierra 4 campus durante casi todo el día, pese al poco seguimiento

El rector de la UPF censura las barricadas aunque cede a la demanda de los jóvenes

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL
BARCELONA

El fracaso de la política ha derivado en Catalunya en un 'procés' poroso que poco a poco, pero sin detenerse, va anegando compartimentos sociales que hasta la fecha habían orillado o picoteado de manera sutil el debate identitario. El ejemplo más palmario de estos días es la universidad pública, que ayer inició una huelga indefinida convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Un paro desigual y algo atropellado que coge con el pie cambiado a un gremio, el de la enseñanza superior, que vive una situación más que incómoda. Embarazosa por varias razones: porque no hay un posicionamiento único y cada facultad friega su propio suelo, porque desde el Govern tampoco llega ninguna directriz ni apoyo explícito, porque asisten a una división profunda entre sus alumnos y porque, ante el naufragio de los políticos de uno u otro sentir, no ven el modo de salir del atolladero. Y a todo esto hoy se les unen, durante dos días, los estudiantes de bachillerato.

La huelga se ha convocado, principalmente, para solicitar a los docentes que la evaluación continúa se cambie por otra de carácter único, y que en estas semanas se anulen los exámenes. El objetivo es que los jóvenes que están volcados en las manifestaciones que siguieron a la sentencia del juicio del 'procés' no sufran un descalabro académico. Pero, como la cosa va por barrios, en algunas universidades, como en la Pompeu Fabra, la que más refriegas registró, también se exige al rector un posicionamiento político, por ejemplo, dicen, «contra la represión policial». El 14 de octubre, recién conocido el fallo del Tribunal Supremo, la Associació Catalana d'Universitats Públiques ya hizo público un comu-

nicado en el que mostraba su «indignación por la situación que se vive en Catalunya», así como su preocupación «por las circunstancias personales que viven las personas afectadas por la sentencia». Para muchos, aquel edicto se quedó corto. Para muchos otros, se metía en harina de otro costal.

LÍO EN LA POMPEU / Ayer amaneció con problemas en cuatro campus, el de la UPC de Manresa y los de la Pompeu Fabra (Ciutadella, Mar y Poblenou), donde los que querían ir a clase encontraron las puertas bloqueadas por compañeros -algunos de ellos habían pasado la noche en el edificio- que les negaron la entrada. Hubo forcejeos, empujones y gritos, también saltos de valla para entrar en las aulas, pero la cosa no fue a mayores. A través de Twitter, la universidad llegó a recomendar no acercarse a Ciutadella «por seguridad».

El seguimiento, según informó el Departament d'Universitats, también fue desigual: normalidad en la Universitat de Barcelona (solo en Bellas Artes se notó cierto bajón de alumnos), en la de Lleida y en la Rovira i Virgili; un 60% de ausencias en la UPC de

Terrassa; un 20% de seguimiento en la Facultad de Arquitectura de la UPC en Sant Cugat y un 25% de huelguistas en la UPC de Vilanova i la Geltrú. La de Girona cerró porque era festivo (Sant Narcís) y desde la Autónoma informaron de que, al margen del centenar de estudiantes que cortaron la AP-7 durante unos 15 minutos, la situación fue «muy tranquila». La UPF, por la imposibilidad de entrar en las facultades, marcó, involuntariamente, el seguimiento más masivo. A última hora de la tarde, no obstante, se levantaron las barricadas en los tres campus afectados.

«INTOLERANTES» / El rector de la Pompeu Fabra, Jaume Casals, tuvo que negociar hasta última hora con los cerca de 140 alumnos encerrados en sus tres campus, a los que ha garantizado que tendrán una versión mejorada de la evaluación única. También lamentó las «actitudes intolerantes» y las «injustificables barricadas» de los encerrados e hizo un llamamiento a la «responsabilidad». Esta universidad, por cierto, cuenta con cerca de 15.000 matriculados. En la UB, el rectorado ha dejado que cada facultad negocie con los que piden medidas extraordinarias. La mayoría han alcanzado ya acuerdos. Lo mismo sucede en la UPC, donde el diálogo parece ir más despacio. La UAB y la Rovira i Virgili celebran hoy consejos de gobierno para analizar la situación. Girona lo hará mañana.

Por parte del Gobierno, la ministra de Educación, Isabel Celaá, defendió que el derecho «a la protesta pacífica de unos de ninguna manera puede conculcar el derecho de otros a acceder a las clases para seguir con su educación». «Tienen que permanecer abiertas y contar con las medidas de seguridad que les proporciona el Estado de derecho», añadió. ¿La policía en los campus...? Eso son palabras mayores. =

El paro se convoca para pedir que los alumnos que van a las protestas no vean alterado su avance académico

140 estudiantes encerrados en la Pompeu Fabra impidieron el acceso a las aulas hasta el anochecer

